



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA:	PROCESO ORDINARIO LABORAL – SENTENCIA
RADICACIÓN.	05 001 31 05 008 2021 00123 01
DEMANDANTE:	EDILBERTO BEYTAR MENA
DEMANDADO:	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA
LITISCONSORTE POR PASIVA:	LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES

Medellín, once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia proferida el 13 de julio de 2022, por el Juzgado 8° Laboral del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

Pretende el demandante que se declare que le asiste derecho y en consecuencia se condene al pago de la pensión de vejez anticipada por deficiencia física, psíquica o sensorial, intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación, y costas del proceso.

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que nació el 24 de junio de 1961, se encuentra vinculado al Régimen de Ahorro Individual a través de la AFP Porvenir SA, a quien le solicitó el 29 de octubre de 2020 el reconocimiento y pago de la pensión de vejez anticipada por deficiencia física, psíquica o

sensorial, al considerar cumplidos los requisitos dispuestos en el parágrafo 4º del art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, sin recibir respuesta; que cuenta con un total de 1673 semanas cotizadas en toda su vida laboral y una pérdida de capacidad laboral de 47.92% estructurada el 29 de marzo de 2017, según el dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el que se estableció como valor final de la deficiencia 26.42% (pág. 1 a 7 arch. 01, C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Previa subsanación la demanda fue admitida mediante auto del 23 de abril de 2021 ordenándose la notificación y traslado a la parte demandada (arch. 05 C01), quien contestó con oposición argumentando que la pensión pretendida es propia del Régimen de Prima Media y no del RAIS, en el que el requisito principal es el capital con que se conforma la cuenta del afiliado, sin que la edad y semanas sean parámetro para determinar el derecho, y tampoco cumple los requisitos del RPMPD por cuando la deficiencia global es del 47.83% que ponderada lleva a 23.92%, porque no cumple con el supuesto de 50% de deficiencias previsto en la norma. Formuló la excepción previa de falta de integración del Litis consorcio necesario con La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales, y de mérito, las que denominó inexistencia de la obligación, petición antes de tiempo, buena fe de la entidad demandada, necesidad del equilibrio financiero del sistema, hecho exclusivo de un tercero, prescripción, y compensación (pág. 1 a 24, arch. 07, C01).

Mediante auto del 14 de julio de 2021, el juzgado admitió la contestación y dispuso la integración de La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como Litis consorte necesario por pasiva, a quien debidamente notificada se le tuvo por no contestada la demanda (arch. 08 y 16, C01).

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la procuradora judicial para asuntos laborales, no efectuaron ningún pronunciamiento, pese a haber sido notificadas en debida forma (arch. 10 y 14, C01)

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el 13 de julio de 2022, absolvió a la demandada y a la Litis consorte de todas y

cada una de las pretensiones formuladas por el actor, a quien condenó en costas, tras considerar que de acuerdo con reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, la pensión especial de vejez pretendida, prevista en el párrafo 4º del art. 9 de la Ley 797 de 2003, debe reconocerse en ambos regímenes, el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad, se otorga de manera anticipada con ocasión del padecimiento del afiliado con deficiencia física, psíquica o sensorial, estableciéndose que si el capital de la cuenta del afiliado y el bono pensional, si hay lugar a él, no alcanza para financiar la pensión especial, deberá reconocerse la garantía de pensión mínima en virtud de lo previsto en el literal i). del art. 60 de la Ley 100 de 1993.

Empero, al analizar los requisitos legales, pese a que encontró que el actor cumple el requisito de edad, pues cuenta con más de 61 años toda vez que nació el 24 de junio de 1961, y acredita mas de 1673 semanas de cotización en toda su vida laboral, no cumple con el requisito de deficiencia física, psíquica o sensorial, por cuanto de acuerdo con lo establecido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en el dictamen de pérdida de capacidad laboral efectuado el 21 de noviembre de 2018, en el que se estableció que la deficiencia global mediante combinación de valores es del 47.83% que ponderado al 50% lleva a un valor final de 23.92%, de donde derivó la imposibilidad de reconocer la prestación solicitada.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La **parte demandante** interpuso recurso de apelación argumentando que tal como lo manifestó en los alegatos, se tiene que analizar en su conjunto el dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; que en el ítem número 7 del concepto final del dictamen pericial, allí se indica que el valor final de la deficiencia ponderada corresponde al 26.42%, que sumado al valor final de rol laboral del 21.5%, dan lugar a una pérdida de capacidad del 47.92%; que en la segunda página del dictamen, en el acápite de información clínica y conceptos, se indica que la Junta Regional de Calificación emitió una calificación desglosada así: deficiencia 26,42, que es el valor final de la deficiencia que se termina confirmando por la junta nacional, lo que significa que si bien es cierto en el acápite de análisis de conclusiones del dictamen de la junta nacional se hace alusión a que la deficiencia ponderada al 50% corresponde a un 23.92%, eso no

corresponde a lo confirmado, que es lo que había dictaminado la junta regional de calificación, porque ésta tuvo en cuenta como deficiencia ponderada total un 26.42% que fue lo que se confirmó, para un total de 47.92% resultante de sumar la deficiencia con el valor final de rol laboral, ocupacional y otras áreas de un 21.50%, sin que el despacho se percatara de eso, por lo que llegó a la conclusión errada de que el actor no cumple con el supuesto para tener derecho a la pensión de vejez anticipada reclamada, que solicita se reconozca con intereses de mora, pues se solicitó desde el 29 de octubre de 2020.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante providencias del 8 de noviembre de 2022 y 12 de abril de 2023, se admitió el recurso de apelación y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar, respectivamente.

Presentó alegaciones únicamente Porvenir, solicitando que se mantenga la absolución, insistiendo en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda (arch. 02, 03 y 04, C02).

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, y de conformidad con lo previsto en el art. 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el demandante cumple con los supuestos fácticos necesarios para el reconocimiento y pago de la pensión especial anticipada de vejez por deficiencia, prevista en el inc. 1º del párrafo 4º del art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9º de la Ley 797 de 2003, para lo cual habrá de analizarse si dicha prestación resulta procedente en el RAIS, y si conforme a los dictámenes de pérdida de capacidad laboral practicados al afiliado, se acredita la deficiencia prevista en la referida disposición.

No fue objeto de discusión y se encuentra acreditado en el proceso, que: **i)** el señor Edilberto Beytar Mena nació el 24 de junio de 1961, se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual, en la AFP Porvenir, desde el 1º de diciembre de 1994, y a octubre de 2020 contaba con 1673 semanas cotizadas,

incluidas las sufragadas al régimen de prima media en el extinto ISS (pág. 22 y 40 arch. 01, 25 arch. 07, C01); **ii)** fue calificado en primera instancia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia con una pérdida de capacidad laboral del 47,92% estructurada el 29 de marzo de 2017, con una deficiencia ponderada del 26,42%, dictamen que fue controvertido únicamente por el actor, por lo cual la Junta Nacional de Calificación de Invalidez emitió dictamen en segunda instancia el 21 de noviembre de 2018, en el que decidió confirmar el emitido por la Junta Regional (pág. 14 a 21 arch. 1, 55 a 62 arch. 07, C01); **iii)** el 29 de octubre de 2020, a través de apoderada, radicó ante Porvenir solicitud de reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez anticipada por deficiencia (pág. 12 y 13 arch. 01 C01); **iv)** mediante comunicación del 25 de noviembre de 2020 la entidad informó que su pérdida de capacidad laboral inferior al 50% no daba lugar a ninguna prestación por invalidez (pág. 66 arch. 07, C01).

Pretende el actor el reconocimiento y pago de la pensión anticipada de vejez por deficiencia prevista en el art. 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó y adicionó el art. 33 de la Ley 100 de 1993, que consagra los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media, en particular, de edad mínima pensional y densidad de cotizaciones en sus dos primeros numerales, y en el inciso primero del párrafo 4º establece que *“Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993”*.

Tal como lo advirtió la a quo, son múltiples las providencias en las que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el referido aparte de esa disposición, contentivo de la prestación hoy reclamada, es aplicable también a los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, como es el caso que nos ocupa, En sentencia CSJ SL4108-2020, refirió lo considerado por la Corporación en la sentencia CSJ SL 32204, 18 ag. 2010, respecto a la pensión anticipada de vejez prevista en el inc. 2º del mismo párrafo, y la inexistencia de razones de orden financiero, administrativo o legal que impidiera su reconocimiento en el Régimen de Ahorro Individual, que:

Para ello, en síntesis, se refirió al sentido, la finalidad e intención legislativa de la norma y concluyó que: (i) si bien cada modelo pensional presentaba características distintivas, lo cierto es que como integrantes del sistema general de pensiones comparten el fin constitucional de salvaguardar los riesgos y contingencias que ampara la seguridad

social, bajo el norte de optimizar los principios que regulan su actuación; (ii) el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con la reforma del precepto 9.º de la Ley 797 de 2003, no obstante su ubicación en el cuerpo normativo, estatuyó aspectos transversales en cada uno de los regímenes y ejemplo de ello es la prestación regulada en el parágrafo 4.º mencionado; (iii) aunque la disposición alude a las cotizaciones del sistema general de pensiones, ello obedece a que deben tenerse en cuenta las que se efectuaron a cualquiera de los regímenes y no solo a uno de ellos y, si bien precisa el mínimo exigido en prima media, esto es solo un parámetro legal para determinar con exactitud el monto requerido para acceder al derecho pensional, y (iv) pese a que el legislador tiene amplia potestad configurativa para consagrar una determinada prestación en un solo régimen pensional, como en el caso de las pensiones de alto riesgo, tal referencia no fue explícita en el parágrafo 4.º y, por el contrario, claramente pretendió proteger a los afiliados de ambos regímenes.

[...]

Asimismo, es pertinente destacar que este criterio fue expresamente respaldado en la sentencia C-758-2014 por la Corte Constitucional, que en diálogo armónico con la jurisprudencia de esta Corporación declaró condicionalmente exequible el mencionado inciso 2.º, *«en el entendido de que el beneficio pensional previsto en dicha norma, debe ser garantizado tanto a los padres y las madres afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, como a los padres y las madres afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad»* (énfasis añadido).

Y en esta oportunidad, al efectuar el análisis del inciso primero de igual parágrafo, la Sala no advierte motivos que permitan interpretarlo y aplicarlo de una forma diferente al que hasta ahora ha fijado la jurisprudencia nacional frente al segundo inciso; al contrario, existen suficientes razones para consolidar un criterio armónico en cuanto al alcance de las prestaciones especiales de vejez contempladas en esta norma, como se explica a continuación.

Más adelante en la misma providencia, luego de analizar el alcance e interpretación del inc. 1º del parágrafo 4º del art. 9º de la Ley 797 de 2003, su finalidad, su integración normativa en el sistema pensional, el derecho a la igualdad, y aspectos relativos a la financiación de la prestación en el RAIS, concluyó que:

(1) Conforme el inciso 1.º del parágrafo 4.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, la pensión especial y anticipada de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial puede ser exigida y reconocida en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

(2) Tal prestación puede ser exigida una vez se cumplan los requisitos de semanas, edad y porcentaje de deficiencia física, síquica o sensorial establecidos en el inciso 1.º del parágrafo 4.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003.

(3) Si el capital de la cuenta de ahorro individual y el bono pensional si hay lugar a él no alcanzan para autofinanciar la pensión especial, esta queda atada a la garantía estatal de pensión mínima en virtud del artículo 60, literal i) de la Ley 100 de 1993, para lo cual la AFP o aseguradora que tenga a su cargo las pensiones, deben adelantar los trámites legales previstos para hacerla efectiva (artículo 83 *ibídem* y concordantes).

En el anterior contexto, el Tribunal no incurrió en las transgresiones jurídicas que le endilga el fondo recurrente, al ordenar el pago de la pensión especial de vejez del inciso 1.º del parágrafo 4.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, así el actor esté afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad.

El criterio referido ha sido reiterado en las sentencias CSJ SL397-2021 y CSJ SL2265-2022, así como en múltiples decisiones de la Sala de Descongestión Laboral, encontrándose vigente, de ahí que resta por establecer

si el actor acredita la deficiencia requerida para ser acreedor de la prestación reclamada.

En este punto, resulta relevante recordar que conforme lo ha decantado también la jurisprudencia, siendo el puntaje máximo de deficiencia del 50% (que correspondería al 100%), el 50% mínimo requerido por la disposición estaría representado por un puntaje mínimo de deficiencia del 25% (CC T-007-2009, CSJ SL1037-2021), lo cual no sufrió variación con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente para la fecha de calificación, Decreto 1507 de 2014, que en el numeral 3º de su anexo técnico *“Principios de ponderación”*, señala que *“Para efectos de calificación, el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, se distribuye porcentualmente de la siguiente manera: El rango de calificación oscila entre un mínimo de cero por ciento (0%) y un máximo de cien por ciento (100%), correspondiendo, cincuenta por ciento (50%) al Título Primero (Valoración de las deficiencias) y cincuenta por ciento (50%) al Título Segundo (Valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales) del Anexo Técnico”*.

Verificadas las pruebas allegadas, en particular el dictamen de pérdida de capacidad emitido en segunda instancia por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 21 de noviembre de 2018, con ocasión del recurso interpuesto por el demandante en contra del dictamen que fue emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, encuentra la Sala que le asiste razón al apoderado del demandante, toda vez que, pese a haberse considerado por el calificador de segundo grado que *“la Deficiencia Global mediante combinación de valores es de 47.83%, que ponderada al 50% lleva a un valor final de Deficiencia de 23.92%”* y mas adelante que *“... al calificar integralmente las deficiencias, rol laboral y otras áreas ocupacionales, la Pérdida de capacidad laboral es de 39.72%, en consecuencia, no hay criterios para incrementar el porcentaje asignado por la Junta Regional”*, finalizó concluyendo que *“Por lo anterior, esta junta decide CONFIRMAR el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia”*, y en el numeral 7º del dictamen *“Concepto final del dictamen pericial”* se consignan los valores confirmados, que fueron aquellos determinados por la Junta Regional, mismos que no fueron controvertidos por la aquí demandada en su oportunidad, razón por la cual no fueron modificados por el ente calificador en segundo grado, y quedaron en firme con la confirmación de la calificación, así:

7. Concepto fiscal del dictamen pericial		
Valor final de la deficiencia (Ponderado) - Título I		26,42%
Valor final rol laboral, ocupacional y otras áreas ocupacionales - Título II		21,50%
Pérdida de la capacidad laboral y ocupacional (Título I + Título II)		47,92%
Origen: Enfermedad	Riesgo: Común	Fecha de estructuración: 29/03/2017
Fecha declaratoria: 21/11/2018		
Sustentación fecha estructuración y otras observaciones:		
Nivel de pérdida: Incapacidad permanente parcial	Muerte: No	Fecha de defunción:
Ayuda de terceros para ABC y AVD: No	Ayuda de terceros para toma de decisiones: No	Requiere de dispositivos de apoyo: No
Enfermedad de alto costo/catastrófica: No	Enfermedad degenerativa: No	Enfermedad progresiva: No

En conclusión, por cuanto no fue controvertido por la AFP aquí demandada el dictamen emitido en primera instancia, fue confirmado en su integridad por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, motivo por el cual, como acertadamente lo aduce el recurrente, y contrario a lo establecido por la *a quo*, se concluye conforme a las referidas experticias, que la deficiencia ponderada determinada por las Juntas al actor fue del 26.42%, es decir, superior al 50% de deficiencia, lo que aunado al hecho de que cuenta con más de 1000 semanas de cotización (un total de 1707 a mayo de 2021, según informe generado en julio de ese año) y más de 55 años de edad (a los que arribó el 24 de junio de 2016), permite colegir que acredita la totalidad de supuestos fácticos necesarios para el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez por deficiencia pretendida; y, en consecuencia, se **revocará** la decisión recurrida.

La pensión se causó desde el 29 de marzo de 2017, fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, y en particular, de la deficiencia que da lugar la prestación anticipada de vejez, teniendo en cuenta que para esa fecha contaba con una densidad de cotizaciones superior a la mínima requerida, y con más de 56 años de edad.

Y, debe empezar a pagarse a partir del día siguiente a la última cotización efectuada, sin que en este asunto se encuentre acreditado ese hecho, si se tiene en cuenta que la última cotización de la que dan cuenta las historias laborales allegadas corresponde a mayo de 2022 (en certificación emitida en julio de ese año), y el demandante en el interrogatorio de parte absuelto en la audiencia de trámite que se llevó a cabo el 13 de julio de 2022, afirmó que es trabajador bananero, y que en ese momento estaba reubicado e incapacitado desde el 30 de enero de ese año.

Por lo anterior, se ordenará a la demandada reconocer y pagar la pensión anticipada de vejez del actor, a partir del momento en que se acredite el retiro del sistema, cuya cuantía y financiación, tal como lo analizó el máximo órgano de cierre de la especialidad laboral, en la sentencia CSJ SL4108-2020, dependerá de *“capital reunido en la cuenta del afiliado, más el bono pensional si a él hay lugar”, y “si el ahorro acumulado no alcanza para soportar económicamente una pensión mínima, en este escenario también debe acudir a las coberturas automáticas previstas legalmente, que para el caso de la prestación en estudio lo es la garantía de pensión mínima”,* evento en el cual *“la AFP o aseguradora que tenga a su cargo las pensiones, deben adelantar los trámites legales previstos para hacerla efectiva”,* y la nación deberá completar el capital necesario para financiar la pensión mínima de vejez, en virtud del principio de solidaridad.

En consecuencia, se **condenará** a la AFP demandada a reconocer y pagar la pensión especial de vejez anticipada por deficiencia, en los términos expresados, teniendo en cuenta el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del demandante y el bono pensional, a partir del día siguiente a la última cotización, o en su defecto, a partir de la ejecutoria de esta providencia, y *en caso de que ese capital resulte insuficiente,* se **ordenará** asimismo a la AFP adelantar los trámites legales pertinentes para hacer efectiva la garantía de pensión mínima, y a la Nación, a través de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, completar el capital necesario para financiar la pensión mínima de vejez a reconocer.

En cuanto a los **intereses moratorios** pretendidos, considera la Sala que no hay lugar a proferir condena alguna, teniendo en cuenta que para la fecha en la que se solicitó el derecho pensional apenas se había fijado de manera reciente el criterio jurisprudencial conforme al cual la misma resultaba procedente, para lo cual *“fue necesario determinar el alcance y sentido de la norma legal conforme a los objetivos que informan a la seguridad social”* (CSJ SL4108-2020), el mismo que fue reiterado y consolidado con las posteriores sentencias de la Sala de Casación Laboral CSJ SL397-2021 y CSJ SL2265-2022, y en todo caso, por cuanto el reconocimiento y pago de la prestación quedará sujeto al retiro del sistema, expreso o tácito, o la ejecutoria de la providencia, sin que se evidencie por tanto mora en el pago de las mesadas pensionales.

En su lugar, se **ordenará la indexación** de las mesadas pensionales que se causen conforme a lo dispuesto en esta providencia, hasta la fecha en la que se haga efectivo su pago, para compensar la pérdida de poder adquisitivo que sufran por el transcurso del tiempo entre su causación y exigibilidad y su pago efectivo.

Respecto a la **excepción de prescripción** no opera, toda vez que la exigibilidad del derecho o disfrute se establece con posterioridad a la presentación de la demanda, a partir del día siguiente a la última cotización efectuada.

Costas en la primera instancia a cargo de la AFP demandada, según liquidación que efectúe el a quo. En esta instancia no se causaron.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida dentro de audiencia celebrada el 13 de julio de 2022 por el Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, **CONDENAR** a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, a reconocer y pagar la pensión especial de vejez anticipada por deficiencia al señor EDILBERTO BEYTAR MENA, identificado con la CC N° 71.971.205, a partir del día siguiente a su última cotización al sistema pensional, o en su defecto, desde la ejecutoria de esta providencia, teniendo en cuenta para ello el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual y el bono pensional, y solo *en caso de que ese capital resulte insuficiente*, se **ORDENA** así mismo a la AFP adelantar los trámites legales pertinentes para hacer efectiva la garantía de pensión mínima, acorde con lo expuesto en las consideraciones de esta decisión.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, a través de la Oficina de Bonos Pensionales, en caso de resultar necesario, a completar el capital requerido para financiar la pensión

mínima de vejez a reconocer al demandante, conforme al numeral anterior y a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, a pagar la indexación de las mesadas pensionales objeto de condena, en la forma indicada en las motivaciones anteriores.

CUARTO: ABSOLVER a la demandada de la pretensión de pago de intereses moratorios, acorde con las consideraciones de esta decisión.

QUINTO: COSTAS en primera instancia a cargo de la AFP demandada. Sin costas en esta instancia.

SEXTO: Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
Magistrado

(*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado: [\(236\) 05001310500820210012301](#)

Firmado Por:
Luz Patricia Quintero Calle
Magistrada
Sala 017 Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6cc8bae6bdfae45840b27e791e21b71b8b39980ff81223d07f84af27d44fc151**

Documento generado en 11/03/2024 03:51:09 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>